

Y al final nos convertimos en la guardia fronteriza de Estados Unidos

(*Mathieu Tourliere, pág. 12-16*)

En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadounidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos. Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el **Instituto Nacional de Migración (INM)** detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés

El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas. En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.

Sur militarizado

Previo al arranque formal de la GN, agentes de la Policía Federal, el Ejército y la Marina acompañaban a los agentes del **INM** en acciones específicas. Sin embargo, en el sur del país el nuevo cuerpo de seguridad ya sustituyó prácticamente al instituto. El colectivo Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, que aglutina a unas 40 organizaciones de Guatemala y México, documentó el despliegue generalizado de la GN en el sur del país, con retenes conformados por “máximo tres agentes del INM y más de 10 elementos de la GN”. En un informe publicado el pasado lunes 15, dicho colectivo indicó que en Chiapas “el reforzamiento de la militarización ha afectado la dinámica trasfronteriza tradicional por la detención de personas jornaleras de Guatemala que trabajan en las plantaciones cafetaleras”. Reportó también que las estaciones

migratorias de Chiapas y el centro de detención de Tenosique, Tabasco, están hacinados.

De acuerdo con el gobernador Adán Augusto López Hernández, de Morena, en una primera etapa 500 elementos del cuerpo de seguridad operarán principalmente en operativos migratorios en la frontera sur, a pesar de que las ejecuciones no cesan en Tabasco: 11 personas fueron asesinadas entre el 12 y el 17 de julio pasados, entre ellas dos mujeres y un niño de 12 años. Se llevaron a cabo redadas masivas: en una casa de Nacajuca fueron detenidas 68 personas, en el hotel Palominos del centro histórico de Villahermosa fueron capturadas otras 20, mientras que, durante un operativo en un motel de la periferia de la capital, agentes del INM, de la GN y policías detuvieron a 132 personas.

El complaciente

Desde la toma de posesión de López Obrador, el mandatario sacó paulatinamente la gestión de la política migratoria de las funciones de la Secretaría de Gobernación –a la que pertenece el INM– y la entregó a Ebrard. Tal transferencia se concretó en la primera quincena de junio: el 7 de junio el secretario de Relaciones Exteriores pactó en Washington con la administración de Trump el endurecimiento de las medidas de contención. Y en la conferencia matutina de AMLO del siguiente 11 de junio, Ebrard presentó un “equipo especial” para aplicar la nueva estrategia migratoria que él encabeza. Tres días después, el académico **Tonatiuh Guillén López** presentó su renuncia al INM por estar en desacuerdo con la estrategia antinmigrante. Desde diciembre anterior el doctor en sociología promovía el “nuevo modelo de política migratoria” de la Cuarta Transformación, que planteaba un punto final a los operativos y las redadas contra los migrantes y se enfocaba en la protección a los derechos humanos. Lo sustituyó **Francisco Garduño Yáñez**, quien era el encargado de las cárceles federales. Con su llegada se disparó el número de operativos y detenciones.

El diario The Washington Post reportó que, durante este encuentro, el gobierno mexicano entrante aceptó un plan llamado “Quédate en México”, que convertiría el país en sala de espera para los solicitantes de asilo extranjeros. Olga Sánchez Cordero, la actual titular de Gobernación, desmintió la noticia de inmediato. Dos meses después, el 20 de diciembre de 2018, la administración de Trump anunció el lanzamiento del programa conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), que era en todos puntos similar al programa “Quédate en México” revelado por el diario estadounidense.

Desde la campaña electoral de 2016 que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos, Trump solía atacar a México y repetir que construiría un muro en la frontera, el cual pagarían los mexicanos. Lo cierto es que, hasta el momento, el gobierno mexicano paga solo la política de contención migratoria: el pasado miércoles 17, el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga insistió en que el gobierno federal “está asumiendo prácticamente la totalidad” de los costos y de la atención a la política migratoria. Recordó que “el INM y la Comisión Mexicana de

Ayuda a Refugiados (Co-mar) están exentos de las medidas de austeridad que hemos visto en otras instancias de gobierno, respecto a la reducción de plazas, en el arrendamiento de autos”. (Con información de Isaín Mandujano, en Chiapas; Noé Zavaleta, Veracruz; Armando Guzmán, Tabasco, y Javier Cruz, Baja California.)

La GN ya empezó a criminalizar a los migrantes

(Rodrigo Vera, pág. 16-20)

“¡Vamos a entrar al albergue! ¡Venimos a realizar una verificación migratoria!”, les dijeron los agentes de la Guardia Nacional (GN) a los encargados del Centro de Atención al Migrante Exodus, localizado en la ciudad sonorenses de Agua Prieta. – ¡No! ¡Aquí no pasan! Este es un lugar privado –los atajó en la entrada Perla del Ángel Martín, una de las trabajadoras voluntarias de ese albergue fronterizo. Molestos, los cerca de 20 guardias se vieron unos a otros. El jefe del grupo se acercó a Del Ángel y, mirándola a los ojos, le dijo amenazante: –Mire, este es un lugar público. Más vale que nos dejen entrar. Venimos a ver cuántos migrantes tienen, con qué donativos se están financiando ustedes y quiénes les dan esos apoyos. –Aquí no entran. ¿Traen una orden escrita para poder inspeccionar? –le preguntó Del Ángel. –No, no la traemos. Y ya déjenos entrar para hacer nuestra inspección –insistió el guardia. Desde el interior del albergue, los atemorizados migrantes atisbaban a los guardias que habían llegado a bordo de tres vehículos militares. Al convoy se sumaron dos vehículos más. En un momento se juntaron más de 30 elementos de la GN, con uniforme castrense y portando armas largas. A través de sus teléfonos celulares, los guardias reportaban el incidente a las oficinas locales del **Instituto Nacional de Migración (INM)**, mientras que los encargados del albergue, para asesorarse, telefoneaban a la coordinación regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Nogales, que maneja esta casa del migrante.

Un estreno intimidante

Los focos rojos prácticamente se encendieron en los 133 albergues y centros de atención para migrantes que, como el de Agua Prieta, maneja en todo el país la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la institución con mayor infraestructura para atender a esta población vulnerable. El sacerdote Arturo Montelongo, secretario ejecutivo de la Dimensión de Movilidad Humana de la CEM y quien a nivel nacional coordina el trabajo de estos albergues, comenta preocupado: “Vendrán cosas muy graves si se repiten incidentes como el de Agua Prieta, donde la Guardia Nacional ya empezó a criminalizar la migración. ¡Imagínese! Bajo esa concepción se verán nuestros albergues como centros de delincuencia. Y esto no sólo afectará a los migrantes, sino también a los defensores de sus derechos humanos. Todos nos convertiremos en delincuentes. “¡Claro! No faltará algún ‘coyote’ o traficante de personas que de pronto se cuele por ahí. Puede ocurrir. Más no por eso debe criminalizarse a todos los migrantes, quienes lo menos que quieren es delinquir mientras están de paso en algún país

(de tránsito) o llegan a su destino. No les conviene cometer delitos. Sería patear el pesebre.

“El **Instituto Nacional de Migración**, en principio, no debe hacer uso de la fuerza. Pero la Guardia Nacional viene con la idea de que puede recurrir a la fuerza para de-tener migrantes y hacer revisiones en albergues, poniendo en peligro la integridad de las personas. Ojalá y no se llegue a eso. “Pero tristemente hemos visto foto-grafías en los medios donde elementos de la Guardia Nacional les impiden a migrantes cruzar el Río Bravo para internarse en Estados Unidos. Eso no debe ser. Ese trabajo le corresponde a las autoridades estadounidenses, porque son ellas las que no quieren que crucen sus fronteras. Pueden hacer lo que quieran en su territorio. Aquí la Guardia Nacional no tiene por qué hacerles el trabajo sucio.”

Contra los muros humanos

En sus oficinas de la Dimensión de Movilidad Humana, el sacerdote Montelongo, con 19 años de trabajar en la pastoral para migrantes, asegura sin tapujos: “Aquí en México ya estamos aplicando las leyes migratorias de Estados Unidos. Y todo por un capricho de Donald Trump, quien amenaza con imponer medidas arancelarias a nuestros productos en caso de que no apliquemos su política migratoria. ‘Te impongo aranceles si no me detienes a los migrantes’; esa es su amenaza, basada en sus cálculos políticos. “Y el enviar a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos es echarlos simplemente a su patio trasero. Esto nos crea problemas de asistencia humanitaria en la frontera norte. Al menos nuestro gobierno debería exigirle al estadounidense que agilice los trámites de asilo para tan-tas personas.

Crisis humanitaria

En la entrevista, asegura Montelongo que actualmente México vive una “emergencia humanitaria” por la gran cantidad de migrantes que atraviesan el territorio nacional y abarrotan los albergues. “Empezamos a vivir la emergencia humanitaria a raíz del nuevo fenómeno de las caravanas de migrantes, quienes ya no sólo vienen de Centroamérica, sino también de África y Asia; es una migración transcontinental. “Nuestros albergues no tienen ya capacidad para atenderlos. Están saturados. Ningún albergue puede atender a más de 500 personas. Y si llegan mil, pues claro que allí hay una emergencia. De tal manera nos vemos obligados a levantar carpas para alojar a tanta gente. ”“Para afrontar mejor esta emergencia, organizamos los albergues en tres zonas: norte, centro y sur. Y en todas es-tamos trabajando con las diócesis y las congregaciones religiosas dedicadas a la atención de migrantes, como los scalabrinianos o los jesuitas, las hermanas josefinas o de la Caridad.”

Por lo pronto en las zonas fronterizas la GN ya está realizando rondines en los albergues, carreteras, hoteles, terminales de autobuses y puntos de mayor afluencia de migrantes. Frida Martínez, abogada del albergue Espacio Migrante,

de Tijuana, relata: “Aquí en Tijuana, los elementos de la Guardia Nacional ya están realizando funciones de verificación migratoria. Incluso, junto con el Ejército, colocaron retenes en la terminal de autobuses y en la autopista que va a Mexicali. Realizan también rondines afuera de los albergues y en la zona conocida como Playas de Tijuana.”— ¿Y ustedes qué medidas están tomando?—Estamos colocando candados en los accesos de nuestros albergues. Pedimos a los migrantes que, cuando salgan, vayan siempre acompañados, lleven consigo un número telefónico de un visitador de la CNDH y no se arriesguen a ir a Playas de Tijuana y otros puntos peligrosos. Nos pre-ocupan sobre todo los haitianos, quienes son más identificables por su color de piel.

El plan de Trump se descarriló en Guatemala

(Julie López, pág. 20-23)

Ciudad de Guatemala.- Desde hace varias semanas la administración de Donald Trump tenía su plan para reducir el flujo de inmigrantes centroamericanos. El lunes 15 incluso anunció que sólo evaluaría las solicitudes presentadas desde un tercer país seguro; luego, según el guion, Trump y el mandatario de Guatemala Jimmy Mora-les firmarían un acuerdo que convertiría a Guatemala en ese tercer país seguro... Pero el plan se descalabró. Desde junio pasado Trump hizo el anuncio y el viernes 12 la revista The New Yorker citó a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien confirmó que “a principios de la semana siguiente” Guatemala y Estados Unidos suscribirían el acuerdo para que los migrantes de cualquier país (no sólo del istmo centro-americano) que quisieran solicitar asilo a Estados Unidos lo hicieran desde Guatemala, ya no desde México. Todo estaba listo, pero el domingo 14, cuando el presidente Morales preparaba su viaje a Estados Unidos para firmar el acuerdo, tuvo que cancelarlo debido a cuatro amparos presentados por el encargado de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas; el excandidato presidencial del partido Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, y los excancilleres guatemaltecos, Gabriel Orellana y Édgar Gutiérrez ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la más alta instancia legal de Guatemala.

Otra salida es solicitar asilo desde un tercer país seguro, descartado en tanto: a) Guatemala y México no adquieran ese status con la firma de un acuerdo bilateral con Washington, y b) para llegar a Canadá (el más cercano con esa calidad) se requiera pasar por suelo estadounidense. El DHS y el Departamento de Justicia estadounidense establecen algunas excepciones para solicitantes no mexicanos cuya solicitud anterior haya sido denegada en su primer país de llegada: en los casos de trata de personas, o bien si el primer país de tránsito no es signatario de un tratado internacional de refugiados. En el continente, sólo Cuba y Guyana no lo son. Los migrantes de otros países, aparte de México, que huyan de la violencia deben solicitar asilo en los países signatarios de un tratado internacional de refugiados, pero no en Estados Unidos.

Mala coyuntura

Trump complicó el plan cuando se sentó a la mesa a negociar con una administración, la de Morales, a la que sólo le quedan seis meses de gestión. El próximo 11 de agosto, en una segunda vuelta electoral, los guatemaltecos decidirán quién lo sucederá. Los candidatos son Sandra Torres, de la UNE, y Alejandro Giamattei, del partido Vamos. El ganador asumirá la Presidencia el 14 de enero de 2020. Hace un mes, Torres comentó que Morales carecía de legitimidad política para comprometer al país con el acuerdo de tercer país seguro. Según ella, esa decisión correspondía al gobierno entrante. Giamattei dijo que había propuesto un plan alternativo a la Comisión del Migrante en el Senado mexicano, pero no reveló su contenido.

El 25 de junio pasado, en una conferencia de prensa con el secretario del DHS Kevin McAleenan y los ministros de Gobernación de Honduras, El Salvador y Guatemala, este último, Enrique Degenhart, habló de la posibilidad de que Costa Rica, Panamá y Colombia se integren al plan regional en un corto plazo. La idea, dijo, es que a mayores esfuerzos de detención y expulsión de migrantes indocumentados en cada país, menor será el número de migrantes que alcancen la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, el plan tiene algunos puntos débiles, como Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega no integra los acuerdos, aun cuando es la primera escala centroamericana de los cubanos que viajan a Guatemala y México.

El castigo

McAleenan declaró en Guatemala que Washington “no dejaría solo” a ningún país al que solicitara cooperación para controlar la migración indocumentada, y que esperaba lograr un acuerdo regional con ese país y México. “Este es el nivel más alto de cooperación entre países que he visto en mi carrera”, dijo el funcionario estadounidense. No obstante, bastó que el presidente Morales no pudiera firmar el acuerdo de tercer país seguro para que Pompeo advirtiera que se suspendía la asistencia en Centroamérica, con clara dedicatoria a Guatemala y Honduras, a la vez que urgía al istmo a reducir el número de migrantes que genera. Ambos países, excluidos de su gira, no consiguen persuadir a sus ciudadanos de que no emigren de forma indocumentada. En 2018, 50 mil unidades familiares guatemaltecas (adultos y niños) llegaron a la frontera sur estadounidense, el doble que en 2017 y más que de cualquier otro país, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos.

A principios de mes, cuando Washington aún consideraba el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala, un portavoz del DHS, Phillip Bluestein, dijo que ambos países analizaban “acuerdos adicionales para abordar flujos migratorios y temas de asilo”, y trabajaban en iniciativas para asegurar que poblaciones vulnerables recibieran protección inmediata. Sin embargo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala ha denunciado desde hace al menos tres años que los inmigrantes que llegan al país son víctimas de robo, y algunos hasta de extorsión a manos de agentes de la policía guatemalteca. Otros son blanco de ataques armados.

Problema de números y recursos

En julio, en la Operación Gobernanza, la policía guatemalteca revisó autobuses colectivos en rutas que conducen hacia la frontera con México. Detuvo a 109 indocumentados de El Salvador, Honduras, Haití, Camerún, Eritrea y Bangladesh, y los ex-pulsó. El mes anterior, fueron 150, procedentes de Haití y de países africanos, y los llevaron al único albergue del IGM, ubicada en la Ciudad de Guatemala, con capacidad para 200 personas. Como otros migrantes ya ocupaban el albergue, varios de los detenidos, entre ellos niños y bebés, permanecieron en la calle vigilados por policías para evitar que huyeran. El día de las capturas, las autoridades permitieron que una vecina del albergue alojara en su casa a 22 adultos con menores de edad, algunos de ellos con resfríos o enfermedades estomacales, y les procuró atención médica por medio de un grupo de obras de caridad. Mena dijo que llevan a los migrantes a los hospitales públicos sólo cuando requieren atención urgente. No obstante, el Hospital San Juan de Dios, el estatal más cercano al albergue, cobra en promedio 120 dólares por paciente. Con un presupuesto anual que ronda los 70 millones de dólares, el nosocomio sólo podría atender a cuatro pacientes por día, pero la sala de emergencias recibe hasta a 400, la mayoría por enfermedades comunes.

Felipe Calderón permitió a la CIA operar desde México

(J. Jesús Esquivel, pág. 24-26)

Washington.- Durante su gestión en Los Pinos, y escudándose en acuerdos firmados con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida, aun por encima de las restricciones constitucionales y soberanas del país, Felipe Calderón otorgó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) licencia para operar libremente en México. Documentos clasificados de México que pudo consultar Proceso revelan cómo durante el sexenio del panista el gobierno de los Estados Unidos desplegó a sus espías en territorio mexicano para “participar” en la guerra contra el narcotráfico, que resultó un fracaso. En septiembre de 2010, en un encuentro protocolar realizado en Washington, el entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, expuso: “Durante la administración del presidente Calderón el nivel de cooperación entre el Cisen y la CIA ha sido excepcional. Por lo tanto, es necesario profundizar y expandir los proyectos de cooperación que se pusieron en marcha en 2007 y 2008”.

Los acuerdos de cooperación bilateral

Según los expedientes clasificados en el sexenio de Calderón, éste autorizó la operación de las agencias de inteligencia estadounidenses en México desde el 22 de mayo de 2007, cuando se firmó una declaración conjunta México-Estados Unidos. El 25 de agosto de 2008 la reforzó con la creación del Marco Estratégico de Inteligencia México-Estados Unidos, firmado por el propio Valdés Castellanos y Michael McConnell, director de la DNI. Dos años después, con la firma del ACII en

septiembre de 2010 Calderón amplió las libertades de operación de la CIA en México –ante el fracaso de su lucha militarizada contra el narcotráfico– y usó como justificación la asistencia que recibía de Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida.

Los méritos de Bush

El marco estratégico binacional de espionaje al narcotráfico y al crimen organizado tenía en 2010 tres objetivos principales: ofrecer perspectivas analíticas sobre aspectos estratégicos clave y amenazas potenciales; promover y desarrollar colaboración de inteligencia en temas de interés común, y establecer una relación de alto nivel que pudiera ser usada para atender otros temas bilaterales que se consideraran importantes. En 2007 y 2008, bajo el lema de la “corresponsabilidad” en la lucha al narcotráfico, agentes de la CIA, de la Administración Federal Antinarcóticos (DEA), del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Pentágono y otras agencias de espionaje estadounidenses obtuvieron la licencia de las autoridades de México para incursionar en su territorio.

Escenarios complicados cuando México ingrese al Consejo de Seguridad

(Maurizio Guerrero, pág. 27-29)

Nueva York.-Con el respaldo unánime de los países de América Latina y el Caribe, México presentó en junio pasado su candidatura para convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2021-2022. Algunos expertos consideran que ahí México correrá el riesgo de ser humillado diplomática y políticamente por el gobierno de Estados Unidos, que encontrará en la participación de su vecino en el máximo foro de la diplomacia internacional una oportunidad más para amagar y chantajear a los mexicanos. Otros, como el actual embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, opinan que el Consejo de Seguridad ofrecerá al gobierno más opciones diplomáticas para lidiar con su vecino del norte, lo que le daría a la administración de Andrés Manuel López Obrador un mayor margen de negociación. Los riesgos que corre México tienen antecedentes cercanos. En mayo pasado el presidente estadounidense Donald Trump doblegó al país tras la amenaza de imponer aranceles de 5% a los productos que exporta a Estados Unidos. La condición para evitarlo fue que el gobierno mexicano tomara medidas inmediatas para reducir la migración de Centroamérica.

El riesgo y las ventajas

Pese a los riesgos, durante su presencia en el Consejo de Seguridad en 2002-2003 México logró oponerse a que Estados Unidos presentara una resolución que hubiera permitido una ofensiva internacional contra Irak bajo la excusa de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas nucleares. Como consecuencia, la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak constituyó una violación al

derecho internacional, según el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. La coyuntura actual permite vislumbrar un escenario similar en relación con la su-puesta intención de Irán de desarrollar armas nucleares. “Es una de las coyunturas posibles que México tendría que tratar, y cuando llegue el momento el gobierno mexicano deberá juzgar la situación sobre los méritos intrínsecos del tema, no en abstracto. Esto no se resuelve con principios sino con hechos”, afirma Castañeda.

Crisis del multilateralismo

Las amenazas bilaterales para México su-ceden en una coyuntura especialmente delicada, pues el andamiaje internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra más débil que nunca y ya no resulta tan clara la hegemonía absoluta de Estados Unidos. “Para nadie es un secreto que el multilateralismo está en una gravísima crisis. La carta de la ONU (el documento rector de este organismo) no podría ser aprobada hoy. No existiría consenso”, opina Llorenti. El diplomático boliviano señala como principal responsable de esta crisis a Estados Unidos, que se ha alejado de los instrumentos de mediación internacional y recurre cada vez más a los actos unilaterales. A su vez, el experto del International Crisis Group, Gowan, considera que “el mayor peligro en el futuro es la más amplia desintegración de la cooperación internacional, no sólo en la ONU sino en la Organización Mundial de Comercio y en los acuerdos bilaterales de armas, por ejemplo”.